

Committee on the Application of Standards CAN/Solomon Islands/PV.17

Commission de l'application des normes 07.06.22

Comisión de Aplicación de Normas

110th Session, Geneva, 2022

110^e session, Genève, 2022110.^a reunión, Ginebra, 2022

Solomon Islands (ratification: 2012)

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182)

Discussion by the Committee

El Presidente – El primer caso de esta mañana se refiere a la aplicación del Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) por las Islas Salomón. Debo informar a la Comisión que el Gobierno de las Islas Salomón está acreditado ante la Conferencia, pero no se ha registrado en nuestra comisión. Por consiguiente, el caso va a ser discutido en ausencia del Gobierno, pero el representante de las Islas Salomón ha enviado una nota a esta comisión. Le voy a pedir a la representante del Secretario General de compartir con los miembros de la Comisión el contenido de esa carta.

Representative of the Secretary-General - We have received a message from the Chief Labour Officer of the Ministry of Labour of the Solomon Islands an hour ago and I am going to read it out to you because it is addressed to the entire Committee:

“Dear Colleagues,

I regret to inform the Committee that the Government of Solomon Islands is unable to take the floor before the Committee today, as we were interrupted by long holidays in the past couple of days and that had affected our preparation for this important session.

However, we had noted the comments made by the Committee of Experts and are happy to provide the information needed by the Committee in our next reporting schedule.

We hope that the Committee takes note of our interest to appear and understands our situation.

Thank you very much for your understanding in this matter.”

Miembros empleadores – El presente caso trata sobre la aplicación de un convenio fundamental, el Convenio núm. 182 en las Islas Salomón. Destaco que es la primera vez que la Comisión debate la aplicación de este Convenio que fue ratificado por las Islas Salomón en el año 2012. La Comisión de Expertos ha hecho una observación y una solicitud directa sobre la aplicación de este convenio.

Lamentamos que el Gobierno no esté participando en esta discusión, sin duda es muy importante para el trabajo de esta comisión conocer las observaciones de los Gobiernos en la aplicación de los convenios, y lamentamos que sea por una cuestión como sus

festividades. Sin embargo, agradecemos que haya presentado información aclarando algunas cuestiones relativas a la aplicación de este convenio.

Las observaciones de la Comisión de Expertos esbozan elementos muy graves en la inadecuada aplicación del Convenio en las Islas Salomón. Permítame resumirlos entonces en dos cuestiones: en primer lugar, en relación con el artículo 3, a) que «prohíbe todas las formas de esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, como la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados». La Comisión de Expertos observó que la Ley de Inmigración núm. 3 de 2012 penaliza la trata de menores de 18 años y establece como sanción una multa o una pena de prisión.

Sobre el particular, el Gobierno informó en su memoria que la División de Inmigración de las Islas Salomón notificó tres casos de trata de niños durante el periodo de enero a marzo de 2020 y estos casos terminaron en absoluciones. De igual forma, el Gobierno informó que existen pruebas de la venta y trata de niños, especialmente de niñas por parte de sus padres a trabajadores extranjeros. Estos hechos también han sido reportados y constatados con gran preocupación por el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

La Organización Internacional para las Migraciones en el estudio que publicó en 2019 sobre las Islas Salomón, también hizo énfasis en el elevado número de casos notificados de explotación sexual y trata de las que son víctimas los niños y las niñas de las comunidades cercanas a los campamentos madereros. Es por lo anterior, que los empleadores apoyamos las solicitudes ya realizadas por la Comisión de Expertos para que el Gobierno adopte todas las medidas necesarias y urgentes con la finalidad que los culpables de cometer delitos como la venta o la trata de niños y niñas sean identificados, procesados y castigados. En el mismo sentido, solicitamos que el Gobierno proporcione información detallada sobre el número de investigaciones que se están llevando a cabo y las etapas procesales en las que se encuentran dichas investigaciones.

En segundo lugar, las observaciones de la Comisión tienen que ver con la utilización, reclutamiento u oferta de niñas y niños para la prostitución. Tomamos nota de forma muy positiva de la información que presentó el Gobierno sobre la modificación realizada al Código Penal para proteger a todos los niños y niñas menores de 18 años de la prostitución de conformidad con los comentarios que ya habían sido presentados por la Comisión de Expertos.

El artículo 141, 2) de la Ley del Código Penal (enmienda) (Delitos Sexuales) de 2016, establece que la persona que recluta o intenta reclutar a otra persona para que proporcione servicios de comercio sexual, ya sea en las Islas Salomón o en otro sitio, puede ser castigada con una pena de hasta veinte años de prisión si la víctima es menor de 15 años, y de hasta quince años de prisión en los demás casos. Esta modificación de la ley penal va en concordancia con lo dispuesto con el Convenio, lo que acogemos con satisfacción.

Por lo cual, los miembros empleadores alentamos al Gobierno a seguir trabajando con las organizaciones de trabajadores y de empleadores más representativas y con las organizaciones internacionales de cooperación para el desarrollo para prevenir la utilización y reclutamiento de niños y niñas para la prostitución.

Asimismo, los miembros empleadores alentamos al Gobierno a seguir aplicando con carácter prioritario las medidas relativas a la concientización sobre el trabajo infantil y la sensibilización de la comunidad, así como el desarrollo de las capacidades de los inspectores del trabajo, la justicia penal, los trabajadores sociales y el sector privado.

Por otro lado, teniendo en cuenta el papel de la educación en la prevención de las peores formas de trabajo infantil los miembros empleadores sugerimos al Gobierno que intensifique sus esfuerzos para facilitar el acceso a la educación básica gratuita a todos los niños y niñas, con la finalidad de lograr incrementar las tasas de escolaridad y disminuir las tasas de abandono escolar.

Con eso entonces, finalizo diciendo que hubiese sido de la mayor importancia escuchar al Gobierno, y quedamos atentos a los comentarios de los miembros trabajadores.

Worker members – The Worker members deeply deplores the absence of the Government for the discussion of its case. We recall the importance of the Committee's mandate, which is to provide a tripartite forum for dialogue on outstanding issues relating to the application of ratified International Labour Conventions. A refusal by a government to participate in the work of the Committee is a significant obstacle to the attainment of the core objectives of the International Labour Organization.

On the substance of the case, we note that this is the first time that the Committee has had the opportunity to examine the application of the Convention in the Solomon Islands. We note that the Solomon Islands ratified the Convention in 2012 and that after sending its first report on the application of the Convention in 2015, the Government failed to send regular reports until 2021. In this respect, the Worker members wish to recall the fundamental nature of the dialogue that must be established between the Member States and the ILO, particularly through the scrupulous respect of the reporting obligations linked to the standards.

With regards to the steps taken by the Government to combat the worst forms of child labour, including the sale and trafficking of children for the purpose of sexual exploitation, the Worker members take note of the adoption in 2016 of the Penal Code (Amendment) (Sexual offences) Act which, in conjunction with the Immigration Act No. 3 aligns the national legislation with the Convention, as per the recommendations of the Committee of Experts.

Trafficking of persons under 18 years of age, whether internal or transnational, is now criminalized and sanctioned with a prison term. Using, procuring or offering of boys and girls of under the age 18 for the purpose of prostitution or for the production of pornography or pornographic performances is also criminally sanctioned under the Penal Code (Amendment) (Sexual offences) Act.

While we take note of these positive developments in the legal sphere, we note with concern that in practice, there is consistent evidence of the sale and trafficking of children, particularly of girls, by their parents to foreign workers. Investigations have revealed that children are being used as nightclub, motel and casino workers in Honiara, the capital city, as well as on foreign and local commercial fishing vessels, and are being offered to clients for sexual services as part of their employment. Moreover, most logging camps in the country are sites to which children are domestically trafficked in order to be sexually exploited. Studies carried out by NGOs estimate that each camp has around six to 12 girls aged between 11 and 16 years old for these purposes. The sexual exploitation of these girls is often condoned as foreign logging workers provided financial aid to the girls' families.

In this regard, we note that operations of child labour monitoring are entrusted to the Royal Solomon Islands Police Force, the labour inspectors and the Transnational Crime Unit, while a National Central Bureau of INTERPOL was established in the capital in 2017 to support the domestic law enforcement agencies.

However, we regret the lack of information on the activities of prevention, inspection, investigation and prosecution carried out. As regards investigations carried out and penalties imposed, we note from the Committee of Experts' observation that the three cases of trafficking in children reported in the period January–March 2020 have ended in acquittals.

The Worker members recall that Article 1 of the Convention requires that measures be adopted to ensure not only the prohibition of the worst forms of child labour in law, but also their elimination in practice. Monitoring mechanisms are essential for the effective translation of the relevant legislation into practice and, to echo the Committee of Experts' call in the 2012 General Survey on the Fundamental Conventions, measures should be adopted to bring cases of worst forms of child labour to the attention of the judicial and administrative authorities, and to encourage these authorities to apply the penalties provided in law.

Therefore, we call on the Government to strengthen the capacity of law enforcement officials and labour inspection systems responsible for combating the worst forms of child labour. This includes ensuring that sufficient human and material resources are allocated to these institutions for the performance of this mandate and that cooperation between them is promoted and facilitated.

The Worker members welcome the efforts deployed by the Government to increase the school enrolment, attendance and completion rates in primary and junior secondary education, in particular through its Education Strategic Framework 2016-2030. Nevertheless, we note that UN supervisory bodies have expressed concern at the disparities in the quality of access to education in urban and remote areas. The Worker members emphasize the importance of ensuring access to free basic education to prevent the engagement of children in the worst forms of child labour and to contribute to the rehabilitation and social integration of children removed from these worst forms.

The Worker members take note of the persisting gaps in the legislation, including the absence of a provision in the national penal legislation prohibiting the use, procuring or offering of a child under 18 years for the production and trafficking of drugs; and the absence of a list of types of hazardous work prohibited for children under the age of 18.

On this second aspect, we note that the UN Committee on the Rights of the Child in its 2018 observations, had requested the Government to take the measures necessary to ensure that no child under 18 years of age engages in hazardous labour, including in the agriculture, logging, tourism and fishing industries. We also note that the Government is in the process of developing such list, with the technical support of the ILO. We call on the Government to adopt, without delay, penal legislation prohibiting the use, procuring or offering of a child under 18 years for the production and trafficking of drugs and to finalize, in consultation with the social partners, the list of types of hazardous work prohibited for children under 18 years of age.

Finally, we strongly encourage the Government to step up its efforts to collect and analyse statistical data on the worst forms of child labour, including their nature, extent and trends, the number of children protected, the nature of offences reported, investigation, prosecutions, convictions and penalties imposed.

Worker member, Solomon Islands – The Committee of Experts has rightly raised the issue of the worst forms of child labour happening here in the Solomon Islands. The issue of

human trafficking and commercial sexual exploitation of children in the Solomon Islands is a confirmed fact that we did have reported cases on them.

Unfortunately, we only have four reported cases so far. All these cases happened in the logging sector. It can also be assumed that this might be happening in all other sectors in the Solomon Islands but they remain unreported.

In relation to the cases reported, one case went before the Magistrate, but has not been pursued further. We have cases where logging companies paid compensation to parents of abused children and also, we have reported cases which ended up with the lawyers but so far no prosecution has been conducted and we also have reported cases that have been taken up by the police to deal with under the Penal Code but no positive outcome has been achieved so far.

Now these are cases that are known by the workers' union, the union of which I am the president because we represent private sector workers in Solomon Islands, and our members throughout the country have been reporting this to us and we have raised them with, not only the police, but relevant authorities. Unfortunately, none of these cases have been prosecuted, and perpetrators have not been convicted and punished. None of these cases ended up in the High Court. Currently the Immigration Act as well as the Penal Code are relevant to the issue, and I hope that work can be done immediately to review them .

The next relevant legislation is the Family Protection Act. The Family Protection Act, which is quite general, deals with domestic violence and sexual offenses. The Immigration Act, which specifically deals with human trafficking is very vague and makes it difficult to prove the elements of the crime. As a result, the prosecutor, as it happened in one reported case, had to revert to the Penal Code for the relevant provision but only for sexual charges such as underage sex, defilement and rape of under aged persons.

In conclusion, based on our findings and observations, we see that the Government is not serious enough and committed to focus and put emphasis to improve in these areas. There is no specific legislation in place relating to child protection when there should be one. There is a lack of monitoring and policing mechanisms in place. Only incidents in the logging sector have been reported but this could be also happening right across the other sectors.

There is also a lack of awareness, almost 80-90 per cent of the population lack understanding of the laws and their rights under the Solomon Islands' laws. As a result, there may be a lot of cases left unreported.

As regards our recommendations, there is an urgent need to review the current relevant legislations. There is also a need to formulate specific legislation to protect children. And there is also a need to establish a monitoring council to report directly to the Labour Advisory Board on issues in this particular area.

Carrying out awareness programmes by stakeholders is also a necessity. We have discussed those matters with members of the judiciary and they see and share the same view as us.

Membre gouvernementale, France – J'ai l'honneur de m'exprimer au nom de **l'Union européenne (UE) et de ses États membres. L'Albanie**, pays candidat, et la **Norvège**, pays de l'AELE membre de l'Espace économique européen, s'alignent sur la présente déclaration.

L'UE et ses États membres sont attachés à la promotion, à la protection, au respect et à la réalisation des droits de l'homme, y compris les droits du travail et la lutte contre le travail des enfants, en particulier sous ses pires formes.

Nous encourageons activement la ratification et la mise en œuvre universelles des normes internationales fondamentales du travail, y compris la mise en œuvre de la convention. Nous soutenons l'OIT dans son rôle indispensable d'élaboration, de promotion et de contrôle de l'application et de la mise en œuvre des normes internationales du travail ratifiées et des conventions fondamentales, en particulier.

Comme indiqué dans l'Appel à l'action de Durban récemment adopté, la convention, universellement ratifiée, exige des États Membres de l'OIT qu'ils prennent des mesures pour éliminer d'urgence les pires formes de travail des enfants. Nous rappelons l'importance d'intensifier les efforts à cet égard et soulignons notre engagement ferme en ce sens.

En tant que signataires de l'Accord de Cotonou, l'UE et les Îles Salomon ont engagé un dialogue politique global, équilibré et approfondi, couvrant les droits de l'homme, les droits du travail et la lutte contre le travail des enfants, comme condition préalable au développement durable, à la croissance économique et à la réduction de la pauvreté. Les Îles Salomon et l'UE coopèrent également par le biais de l'accord de partenariat économique appliqué depuis mai 2020, qui engage les parties à soutenir les droits sociaux. Les Îles Salomon sont également bénéficiaires du programme «Tout sauf les armes» de l'UE pour les pays les moins avancés.

Nous rappelons notre grande préoccupation sur les rapports faisant état de la vente et de la traite d'enfants, en particulier de filles, par leurs parents à des travailleurs étrangers, principalement dans les communautés proches de sites d'exploitation forestière, à des fins sexuelles.

Bien que ces violations sérieuses de la convention persistent et devraient être traitées, nous saluons la modification apportée au Code pénal en 2016 sur les infractions sexuelles, qui, conformément aux commentaires précédents de la commission d'experts, a été modifiée pour protéger tous les enfants (filles et garçons) de moins de 18 ans de la prostitution et a établi des peines d'emprisonnement plus sévères pour les personnes se livrant à la traite interne des personnes lorsque la victime est un enfant.

Ces amendements juridiques étant désormais en place, nous réitérons l'appel de la commission d'experts à prendre les mesures nécessaires pour garantir que des enquêtes et des poursuites approfondies sont menées et que des sanctions suffisamment dissuasives sont imposées dans la pratique afin d'éliminer les pires formes de travail des enfants.

Nous notons avec une grande inquiétude que, malgré divers rapports sur la persistance généralisée de la traite et de la vente d'enfants à des fins de prostitution et d'abus sexuels, le gouvernement indique dans son rapport que la Division de l'immigration des Îles Salomon n'a signalé que trois cas de traite d'enfants au cours de la période allant de janvier à mars 2020, qui se sont tous soldés par des acquittements.

Nous exhortons le gouvernement à continuer de fournir des informations sur l'application dans la pratique des sections pertinentes du Code pénal et de la loi n° 3 de 2012 sur l'immigration, en particulier sur le nombre d'enquêtes, de poursuites, la nature des infractions, les condamnations et les sanctions imposées aux contrevenants, y compris des informations sur le nombre d'acquittements.

L'UE et ses États membres sont pleinement déterminés à travailler aux côtés des Îles Salomon. Nous poursuivrons notre engagement en faveur des enfants du pays. Nous attendons avec impatience de poursuivre les efforts conjoints avec le gouvernement et l'OIT pour mettre fin à cette pratique de la maltraitance des enfants, notamment en mettant effectivement en œuvre la législation disponible.

Miembro empleadora, Argentina – Los empleadores de la Argentina agradecemos a los oradores precedentes por sus perspectivas sobre el caso, y lamentamos la ausencia del Gobierno en la sesión.

Hemos recibido la información con respecto a la implementación del artículo 77 de la Ley de Inmigración 3, del año 2012. Sin embargo, lamentamos que, aun cuando en la memoria relativa al Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138), el Gobierno ha referido que hay evidencia sobre venta y trata de niñas y niños por sus padres a extranjeros, el Gobierno no ha referido información en esta oportunidad sobre sentencias condenatorias o penas impuestas en virtud de la norma referida o del artículo 145 del Código Penal, referido a delitos sexuales.

En consecuencia, reiteramos la solicitud para que el Gobierno adopte las medidas necesarias para garantizar que se realicen investigaciones y enjuiciamientos exhaustivos, y que se apliquen sanciones suficientemente disuasorias a las personas que se dedican a la venta o trata de niños, y se informen los resultados de estos procesos.

En segundo lugar, en relación al reclutamiento u oferta de niños para la prostitución, nos unimos a expresar satisfacción por la reforma del Código Penal para proteger de la prostitución a todos los niños menores de 18 años, siempre que el reclutamiento o intento de reclutamiento suceda en las Islas Salomón con independencia del lugar de explotación.

Para finalizar, junto con alentar al Gobierno a que continúe reportando información detallada sobre la aplicación en la práctica de las normas enmendadas, queremos destacar la importancia de coordinar acciones complementarias, orientadas a impactar en las condiciones socioculturales, los factores de riesgo y las cuestiones estructurales que determinan la aparición y son consecuencia del trabajo infantil en general y de las peores formas de trabajo infantil en particular.

Con el objeto de diseñar políticas que coordinen eficientemente los recursos disponibles, y promuevan el desarrollo económico de la región y la creación de empleo productivo y de calidad para los adultos del país, reiteramos el pedido de los miembros empleadores alentando al Gobierno a que trabaje para empoderar a los actores sociales e involucrarlos activamente en el diseño de políticas públicas aprovechando la asistencia técnica de la OIT para diseñar estrategias eficaces para erradicar las peores formas del trabajo infantil en el país.

Worker member, Australia – Traffickers subject Solomon Islander children to sex trafficking and forced labour, particularly near foreign logging camps, on commercial fishing vessels, and at hotels and entertainment establishments.

The Immigration Act 2012, together with the Penal Code, criminalizes child sex trafficking and labour trafficking. Section 77 of the Immigration Act addresses offences related to the trafficking of children and provides for penalties of a fine or imprisonment for a term not exceeding ten years, or both.

The Committee of Experts' report notes that the Solomon Islands Immigration Division only reported three cases of trafficking in children in the period from January–March 2020, which have ended in acquittals. This stands in contrast to the concluding observations of the UN Committee on the Rights of the Child in 2018, which expresses serious concern about the sale of children to foreign workers in the natural resource sector, and the International Organisation for Migration case study in 2019, which highlights the high number of reported cases of sexual exploitation and trafficking involving children in communities near logging camps.

This gap between the number of cases and the lack of convictions indicates a number of issues that the Government must address in order to uphold their obligations under the Convention.

First, Section 77 of the Immigration Act is too vague, and the penalties do not match the severity of the crime. A fine in lieu of imprisonment is not commensurate with penalties prescribed for other serious offences – the Government should ensure that penalties are sufficiently dissuasive and reflect the seriousness of the crime.

Second, there is a lack of monitoring and enforcement. We note the direct request from the Committee of Experts to provide information on the activities of the police force, the Transnational Crimes Unit, and other bodies responsible for monitoring the crimes related to child trafficking, including measures to strengthen their capacities.

There is no monitoring mechanism in place, and the Government has not initiated or conducted any anti-trafficking training for law enforcement. The Government should implement measures including additional resources, commitment, coordination, training and awareness, to enable government agencies to investigate and prosecute child trafficking, and should establish a Monitoring Council that reports to the Labour Advisory Board.

Recalling Article 7 of the Convention, we call on the Government to implement effective and time-bound measures to eliminate the worst forms of child labour, including child sex trafficking. This should include thorough investigations and prosecutions against persons who engage in the sale and trafficking of children; ensuring access to basic free education; and ensuring that sufficiently dissuasive penalties that reflect the severity of the crime are imposed in practice.

Membre gouvernementale, Suisse – Nous regrettons le fait que le gouvernement ne soit pas présent. L'éradication des pires formes de travail des enfants, à laquelle participe la convention, est le principe universellement applicable à tous les enfants de moins de 18 ans et constitue l'un des objectifs les plus importants de l'OIT. La Suisse attribue une très grande importance à cette convention fondamentale.

Elle salue donc le fait que, par l'amendement du Code pénal en 2016, le gouvernement a légalement comblé des lacunes importantes afin de protéger tous les enfants, filles et garçons, de moins de 18 ans, de la prostitution. Par l'amendement au Code pénal, le gouvernement a déployé des efforts pour mettre en œuvre les normes internationales du travail et respecter le système de contrôle et les recommandations de la commission d'experts.

La Suisse encourage le gouvernement à continuer de tout mettre en œuvre, sur le plan législatif et avant tout dans la pratique, pour lutter contre le travail des enfants, la traite et l'exploitation sexuelle des enfants. La lutte contre la prostitution des enfants doit être la plus intense possible, pour tous les pays. Cette lutte nécessite, outre le cadre légal approprié, des enquêtes, des poursuites et des sanctions dissuasives. Nous encourageons enfin le gouvernement à continuer à intensifier ses efforts et à s'attaquer également aux origines qui poussent les parents à vendre leurs enfants à des travailleurs étrangers.

Worker member, Canada – The workers of the Philippines support this statement. With the passing of the Penal Code Sexual Offences Amendment Act 2016, the Government has aligned its national legislation with international standards in terms of protecting children from exploitation and prostitution and from being trafficked for sexual purposes. However, important omissions persist within the legislation that may leave children vulnerable to being sexually exploited. For instance, although current legislation contains comprehensive

coverage of child trafficking offences, both within and outside of the country, there is no stand-alone provision that explicitly prohibits the sale of children.

The Committee of Experts has noted the absence of a provision in the national penal legislation prohibiting the use, procuring or offering of a child under 18 years, for the production and trafficking of drugs. Human trafficking in the Solomon Islands is the most common in the logging camps, where children are domestically trafficked for labour and sexual purposes. A Save the Children report estimated that each camp had as many as 12 children aged from 11 to 16 years old. These children often became “house girls” which is synonymous with wives. The sexual exploitation of these girls is often condoned as foreign logging workers provide financial payment to families suffering the hardships of poverty.

The United States’ State Department’s 2021 Trafficking in Persons Report noted specifically that the Solomon Islands labour division did not conduct systematic monitoring and inspection activities at logging operation sites during the term covered by the report. Inspections are critical to the identification, investigation and prosecution of cases of forced labour and sexual exploitation of children within the logging industry.

The Government should also conduct a nationwide assessment on all manifestations of the sexual exploitation of children to develop evidence-based policies and strategies. It must also advance on developing a list of types of hazardous work prohibited for children under the age of 18. Hazardous or exploitative labour as defined in the Child and Family Welfare Act 2016 includes any work that is inappropriate for the child’s age or is hazardous to the child’s physical or mental health, or impairs the child’s education and moral development.

These steps will help provide needed protections to combat forced child labour and sexual exploitation associated with this industry.

Miembros empleadores, - Hemos escuchado, atentamente y tomado nota de las intervenciones de todos los que han hecho uso de la palabra. Agradezco especialmente a los trabajadores y empleadores por las intervenciones realizadas.

Queremos destacar que para lograr la meta 8.7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible —de eliminar el trabajo infantil en todas sus formas para el 2025—, es necesario que todos los Gobiernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores, y la propia OIT trabajemos de forma coordinada y mediante el fortalecimiento del diálogo social.

Recientemente, en el marco de la V Conferencia Mundial sobre la Eliminación del Trabajo Infantil realizada en Durban, Sudáfrica, se indicó que la pandemia ocasionada por la COVID-19, los conflictos armados, las crisis humanitarias y ambientales amenazar con revertir el progreso alcanzado contra el trabajo infantil.

El Llamamiento a la Acción de Durban incluye compromisos en seis áreas diferentes: el primero, hacer que el empleo productivo y el trabajo decente sean una realidad para los adultos y los jóvenes por encima de la edad mínima para trabajar, acelerando los esfuerzos de las múltiples partes interesadas para eliminar el trabajo infantil y dando prioridad a las peores formas de trabajo infantil. El segundo, acabar con el trabajo infantil en todos los sectores. En tercer lugar, reforzar la prevención y la eliminación del trabajo infantil incluidas sus peores formas, el trabajo forzoso la esclavitud moderna y la trata de personas, así como la protección de los supervivientes mediante respuestas políticas y programáticas. En cuarto lugar, hacer realidad el derecho de los niños a la educación y garantizar el acceso universal a una educación y formación gratuitas, obligatorias de calidad, equitativas e inclusivas. En quinto lugar, lograr el acceso universal a la protección social, financieramente sostenible, y en sexto lugar

aumentar la financiación y la cooperación internacional para la eliminación del trabajo infantil y el trabajo forzoso.

Es por ello que los miembros empleadores hacemos un «llamamiento urgente» a enfocar todos los esfuerzos en la prevención y eliminación del trabajo infantil con especial énfasis en la erradicación de las peores formas del trabajo infantil.

Teniendo en cuenta que la Oficina de la OIT tiene una importante capacidad para el desarrollo de programas en los países donde existe trabajo infantil, alentamos al Gobierno a que solicite de manera urgente la asistencia técnica de la OIT con la finalidad de aumentar la capacidad de los mandantes tripartitos. Es preciso, además, enfocarse en la aplicación de estrategias eficaces para erradicar las peores formas de trabajo infantil, previa consulta oportuna y eficaz a los interlocutores sociales. Hacemos además un llamado a la comunidad internacional para que se movilice en torno a lograr la erradicación del trabajo infantil en las Islas Salomón.

Finalmente, alentamos en los términos más enérgicos al Gobierno a que se comprometa de forma inmediata y urgente para abordar las soluciones en la legislación y en la práctica, que tengan impacto en ese flagelo.

Primero, es preciso estructurar las instancias de investigación y judiciales para identificar y condenar a los culpables. Se deben estructurar estrategias para brindar capacitación a las comunidades, a las familias, para proteger a los niños; y sensibilizar a todos los habitantes del país de esta gran problemática.

Es necesario lograr una mayor divulgación de los mecanismos a disposición para enunciar este flagelo. Es necesario, además, fortalecer el sistema educativo para que los niños y niñas de las Islas Salomón tengan la oportunidad de estudiar; y también, se debe garantizar el desarrollo en un entorno propicio para la generación de empresas sostenibles que generen empleos de calidad para los padres y familiares de los niños y niñas.

Worker members – We express once again our deep regret that the Government declined to participate in the work of the Committee and recall that a refusal by a government to participate in the work of the Committee is a significant obstacle to the attainment of the core objectives of the ILO.

We take note of the steps taken by the Government to bring its national legislation into conformity with the Convention, in line with the recommendations of the Committee of Experts. We encourage the Government to continue its efforts and adopt penal legislation prohibiting the use, procuring or offering of a child under 18 years for the production and trafficking of drugs. We also encourage the Government to adopt, without delay and in consultation with the social partners, a list of types of hazardous work prohibited for children under the age of 18.

Despite these positive legislative developments, we remain concerned by the persistence of worst forms of child labour, including the sale and trafficking of children, particularly of girls, for sexual exploitation purposes. We urge the Government to take concrete measures to prevent, prohibit and eliminate these worst forms of child labour, including:

- by strengthening the capacity of law enforcement agencies and the labour inspectorate;
- by promoting their effective cooperation;
- by ensuring that cases of worst forms of child labour are duly investigated, prosecuted and sanctioned; and

- by ensuring access to free basic education to all children in the primary and secondary education, particularly among children from poor and disadvantaged families as well as children living in remote areas.

We also encourage the Government to adopt specific legislation on child protection and to conduct awareness-raising activities to disseminate information to the public on the identification on the worst forms of child labour and on ways to report cases to the authorities.

Finally, we encourage the Government to step up its efforts to collect and analyse statistical data on the worst forms of child labour, including their nature, extent and trends, the number of children protected, the nature of offences reported, investigations, prosecutions, convictions and penalties imposed.

We invite the Government to avail itself of the technical assistance of the ILO.

Conclusions of the Committee

The Committee expressed its deep regret that the Government declined to participate in its work and recalled that a refusal by a government to participate in the work of the Committee, despite being accredited to the International Labour Conference, is a significant obstacle to the attainment of the core objectives of the ILO.

In those circumstances and as provided for in paragraph 34 of document D.1 concerning the working methods adopted by the Committee, the Committee discussed the substance of the case in the absence of the Government.

The Committee took positive note of the steps taken by the Government to bring its national legislation into conformity with the Convention. Despite these positive legislative developments, the Committee expressed its deep concern about the persistence of the worst forms of child labour, including the sale and trafficking of children, particularly of girls, for sexual exploitation purposes.

Taking into account the discussion, the Committee urges the Government, in consultation with the social partners, to:

- **adopt legislation prohibiting the use, procuring or offering of a child under 18 years of age for the production and/or trafficking of drugs, without delay;**
- **adopt, in consultation with the social partners, a list of types of hazardous work prohibited for children under the age of 18, without delay;**
- **strengthen the capacity of law enforcement agencies and the labour inspectorate to address the worst forms of child labour and to promote their effective cooperation;**
- **ensure that cases of the worst forms of child labour are duly investigated, prosecuted and sanctioned;**
- **ensure access to free basic education to all children, particularly children from poor and disadvantaged families as well as children living in remote areas;**
- **collect and analyse statistical data on the situations of the worst forms of child labour, including the nature and extent of such situations, the number of children involved, reintegration procedures, the nature of offences reported, the number of offences investigated, prosecuted and the penalties imposed.**

The Committee urges the Government to avail itself of the technical assistance of the ILO.

The Committee requests the Government to submit a report to the Committee of Experts by 1 September 2022 with information on the application of the Convention in law and practice, in consultation with the social partners.